



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 Rama Judicial del Poder Público  
**JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**

<b>SENTENCIA ACCIÓN DE TUTELA</b>							
FECHA	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)						
RADICADO	05001	41	05	006	<b>2020</b>	<b>00402</b>	02
PROCESO	TUTELA SEGUNDA INSTANCIA No.023 de 2020						
ACCIONANTE	CARLOS ANDRES OSPINA CARDONA						
ACCIONADA	SECRETARIA DE MOVILIDAD MEDELLIN						
SENTENCIA	No.347 de 2020						
DERECHOS INVOCADOS	DERECHO al DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA						
INSTANCIA	SEGUNDA						
DECISIÓN	CONFIRMA						

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor CARLOS ANDRES OSPINA CARDONA, contra la sentencia del Diez (10) de Septiembre de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, en la acción de tutela instaurada por el señor CARLOS ANDRES OSPINA CARDONA, con cédula de ciudadanía No.71.381.942, contra SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLIN, invocando la protección de los derechos fundamentales al derecho del debido proceso y de defensa.

### **LAS PRETENSIONES**

Pretende la accionante se le tutelen sus derechos fundamentales invocados y se ordena a la Secretaria de Movilidad de Medellin, revocar los comparendos Nros. 050001000000017409153,050001000000017361481,05001000000015167171,05001000000010936469,0500100000005313861,0500100000004065299,0500100000004036358,05001000000017390929,05001000000015187662,0500100000015066905,0500100000005523635,0500100000005327613,0500100000004073843,05001000000017376312,05001000000015085227,05001000000010936209, 05001000000004070048, 0500100000005312991,05001000000004056820, 05001000000005332774 y 05001000000003808067, por indebida notificación, rehaciendo el trámite de los mismos.

### **HECHOS DE LA PRETENSIÓN**

Manifiesta el accionante que se enteró de unas infracciones a su nombre, los cuales le había impuesto el municipio de Medellín, con números de comparendos consultados a través del SIMIT, cuyo números son: 050001000000017409153,050001000000017361481,05001000000015167171,05001000000010936469,0500100000005313861,0500100000004065299,0500100000004036358,05001000000017390929,05001000000015187662,0500100000015066905,0500100000005523635,0500100000005327613,0500100000004073843,05001000000017376312,05001000000015085227,05001000000010936209, 05001000000004070048, 0500100000005312991,05001000000004056820, 05001000000005332774 y 05001000000003808067.

### **DE LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA**

LA SECRETARÍA DE TRANSITO TRANSPORTE DE MEDELLÍN, a folios 103/380 allegó escrito en respuesta a la acción donde expresa que: "...en relación con las ordenes de comparendo DO5001000000005327613 del 23/06/2013 y D05001000000003808067 del 08/12/2012, debe señalarse que las mismas se encuentran en estado EXONERADO", para lo cual aporta pantallazos de la sistematización de la novedad de exoneración reportada.

En los demás comparendos manifiesta que: "...Se reportan las presuntas comisiones de las infracciones a las normas de tránsito, con el código C35, Y D2; según lo establecido en el artículo 131 de la ley 769 de 2002 o Código Nacional de Transito, captados en los vehículos de placas MMY059, propiedad del (la) señora (a) CARLOS ANDRES OSPINA CARDONA identificado (a) con la cédula N°. 71381942, se envían las ordenes de comparendo s contenidas en el cuadro N.2, a la dirección tomada de la base de datos de las Secretaria de Movilidad de Medellín, que se alimenta de los datos suministrados por el ciudadano la entidad, para cada una delas fechas de comisión delas infracciones, es decir la CL 37 N.64 60 AP 402 -MEDELLIN, la empresa SERVIENTREGA y/o DOMINA, hizo la devolución de la ordenes de comparendo certificando que no fue posible hacer la entrega efectiva dado que se presentó la siguiente novedad "CAMBIO DOMICILIO Y NO RESIDE", causal de devolución por la cual no se pudo realizar la entrega efectiva", el accionante no tenía actualizada su nueva dirección en la plataforma RUNT, por lo que n puede alegar en su favor su propia culpa, solicita se desestimen las pretensiones de la parte accionante, que el ente accionado

respectó el debido proceso, por lo que no existe vulneración alguna al derecho fundamental.

### **DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

El juez de primera instancia el despacho considera improcedente protegerle a la parte actor su derecho al debido proceso, puesto que el informe rendido por la accionada, las notificaciones fueron remitidas a la última dirección del accionante registrada para efectos en la base de datos de la Secretaria de Movilidad de Medellín, sin embargo no se pudo surtir la notificación personal existiendo devolución de la correspondencia por parte de la empresa de mensajería con la novedad “cambio de domicilio”, por lo cual la entidad accionada procedió a notificar el comparendo mediante aviso de conformidad a lo normado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, como puede conservarse en los anexos de la contestación del escrito de tutela.

Niega el amparo solicitado por el señor CARLOS ANDRES OSPINA CARDONA CON c.c. 71.381942 FRENTE AL Municipio de Medellín- Secretaria de Movilidad, conforme a lo expresado en la parte motiva.

Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente acción de tutela impetrada por el señor CARLOS ANDRES OSPINA CARDONA con C.C. 71.381.942, frente al MUNICIPIO DE MEDELLIN-SECRETARIA DE MOVILIDAD , respecto a los comparendos D05001000000005327613 del 23/06/2013 Y d05001000000003808067 del 08/12/2012, conforme lo expresado en la parte motiva.

### **DE LA IMPUGNACIÓN**

A folios 394/396, el accionante en la impugnación manifestó: *“...No se tuvo en cuenta que no infringió el principio de inmediatez que establece que si bien hubiera podido interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho este recurso debe interponerse en los primeros cuatro meses luego de ocurridos los hechos según el artículo 138 de la ley 1437 de 2011 y el caso no lo hizo debido a que apenas muchos meses después porque miró el SIMIT mas no porque el organismo de tránsito hay agotado todos los recursos para poder notificarse como lo establece la sentencia C-530 de 2003. Tampoco se tuvo en cuenta que la sentencia T-246 de 2015 que habla sobre el principio de inmediatez de la tutela, la cual se supone que debe presentarse en un plazo razonable, establece que siempre y cuando exista un motivo válido como el ya planteado, no se hace necesario ni es un requisito sine*

*qua non para se pueda interponer la acción de tutela que esta se presente en los primeros 4 meses. Que no se tuvo en cuenta que no tiene más recursos de defensa debido a que el organismo de tránsito al no notificarle no puede hacer uso de la audiencia ni de los recursos de reposición y en subsidio de apelación. Que agoto el recurso de revocatoria directa mediante derecho de petición y Tampoco pudo hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.*

*Que no se tuvo en cuenta que le pudo ocasionar un perjuicio irremediable al no poderse defender, por no tener más recurso de defensa debido a la falta de notificación del organismo de tránsito. Que el organismo de tránsito argumenta haber notificado por aviso pero dicha notificación debe tener anexa copia íntegra del acto administrativo y los recursos que legalmente proceden, tal como lo ordena el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 o de lo contrario la notificación sería nula tal y como lo establece el artículo 72 ibídem, que el hecho de que la notificación por aviso no diga los recursos que legalmente procedan viola eminentemente el derecho de defensa.*

*Que no se tuvo en cuenta de que no se le envió el formulario orden de comparendo único Nacional adoptado por el artículo 5to. De la resolución 3027 del año 2010 y como lo ordena el inciso 2do del artículo 137 del Código Nacional de tránsito. Que la nueva ley 1843 de 2017 y la resolución 718 de 2018 establece que todas las cámaras de foto detención deben señalizadas con un aviso que diga” Detención electrónica “(artículo 10 de la ley 1843 de 2017 y artículo 10 de la resolución 718 de 2018), deben contar con unos permisos de la dirección de tránsito y transporte del Ministerio de Transporte...”*

### **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Problema jurídico:

1. Se debe confirmar la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado.
2. El acto de notificación de una foto detección se están vulnerando los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.

### **EL DEBIDO PROCESO FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS**

La Corte Constitucional en sentencia T-545 de 2009, M.P. MARIA VICTORIA CALLE CORREA, hace alusión sobre el tema, indicando:

“De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política y con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, el derecho al debido proceso es garantía y a la vez principio rector de todas las actuaciones judiciales y administrativas del Estado. En consecuencia, en el momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien

de un bien jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo el derecho fundamental al debido proceso.

De acuerdo a lo expuesto, se ha entendido que el debido proceso administrativo, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión (C.P. arts. 4° y 122). En esta medida, las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico.

En cuanto al alcance constitucional del derecho al debido proceso administrativo, la Corte ha dicho que este derecho es ante todo un derecho subjetivo, es decir, que corresponde a las personas interesadas en una decisión administrativa, exigir que la adopción de la misma se someta a un proceso dentro del cual se asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicción, impugnación y publicidad. En este sentido, el debido proceso se ejerce durante la actuación administrativa que lleva a la adopción final de una decisión, y también durante la fase posterior de comunicación e impugnación de la misma.”

#### **MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO.**

Frente al marco legal del trámite contravencional de tránsito, adelantadas por infracciones captadas por fotodetención, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-051 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo precisó: “**Marco legal y jurisprudencial del procedimiento administrativo que debe adelantarse ante la comisión de infracciones de tránsito captadas a través de medios tecnológicos.**

El procedimiento que debe surtirse ante una infracción de tránsito captada por medios tecnológicos está regulado en la Ley 769 de 2002, [p]or la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, y por la Ley 1383 de 2010, [p]or la cual se reforma la Ley 769 de 2002-Código Nacional de Tránsito-, y se dictan otras disposiciones. Entiéndase infracción de tránsito la “[t]ransgresión o violación de una norma de tránsito”<sup>1</sup>.

Según lo estipulado en el inciso 5° del Artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, las autoridades de tránsito tienen autorización para realizar contratos de medios técnicos y tecnológicos a través de los cuales se permita constatar una infracción de tránsito, así como identificar el “vehículo, la fecha, el lugar y la hora”.

---

<sup>1</sup> Artículo 2 de la Ley 769 de 2002.

En este sentido, es pertinente resaltar que el uso de tecnologías permite a las autoridades de tránsito cumplir su función policiva en el marco de los principios de eficacia y economía, en los términos del Artículo 209 de la Constitución Política y del Artículo 3º, numerales 11 y 12, de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior debido a que se permite acceder a medios probatorios precisos y pertinentes, que logran individualizar el vehículo, el lugar, la hora y el motivo de la infracción, elementos suficientes para *iniciar* el proceso contravencional. De acuerdo al párrafo 5 del artículo 8 de la Ley 769 de 2002, la autoridad encargada del Registro Nacional de Conductores está en la obligación de actualizar los datos pertinentes, para el efecto, una de las modalidades empleadas podrá ser la autodeclaración. De acuerdo a la norma, en caso de que el propietario no efectúe la declaración será sancionado con multa de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, de acuerdo con el inciso 5º del Artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, en el evento en que se realice un comparendo en virtud de una infracción detectada por medios técnicos o tecnológicos, como fotos o videos, la misma deberá ser notificada dentro de los tres días hábiles siguientes por medio de correo, en el cual se enviará la infracción y sus soportes al propietario “quien está obligado a pagar la multa”<sup>2</sup>.

Para mayor claridad, es pertinente traer a colación el Artículo 2º de la Ley 769 de 2002, de acuerdo al cual, el comparendo es la “[o]rden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.” Por su parte, la multa se encuentra definida, en la misma norma como una “[s]anción pecuniaria”.

Se debe precisar, en primer lugar, en lo relacionado con el medio determinado por el legislador para la notificación, que su finalidad consiste en poner en conocimiento del propietario del vehículo la infracción y hacer un llamado para que ejerza su derecho de defensa, contradicción e impugnación. Lo anterior debido a que es a aquel de quien se conoce la identidad y datos de contacto y de quien, en principio, es responsabilidad la utilización adecuada de su vehículo<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> En la Sentencia C-980 de 2010, tras tener conocimiento de una demanda de constitucionalidad, frente al aparte resaltado se señala que “*interpretando armónica y sistemáticamente el aparte acusado con la regla general contenida en el párrafo 1º del Artículo 129 de la Ley 769 de 2002, y con el texto del propio Artículo 22 de la Ley 1383 de 2010 (que a su vez modifica el Artículo 135 de la Ley 769 de 2002), la Corte llega a la conclusión, de que la obligación atribuida al propietario de tener que pagar la multa, solo puede tener lugar, como consecuencia de su vinculación formal a la actuación administrativa, y luego de que se establezca plenamente su culpabilidad en la infracción*”.

<sup>3</sup> Sentencia C-980 de 2010.

Se advierte que si bien, primordialmente, el medio de notificación al que deben recurrir las autoridades de tránsito es el envío de la infracción y sus soportes a través de correo, si no es posible surtirse por este conducto, se deberán agotar todas las opciones de notificación, reguladas en el ordenamiento jurídico, para hacer conocer el comparendo respectivo a quienes se encuentren vinculados en el proceso contravencional. Lo anterior, debido a que la finalidad de la notificación, como se dijo anteriormente, no es surtir una etapa a efectos de que permita continuar con el proceso sancionatorio, sino, efectivamente, informar al implicado sobre la infracción que se le atribuye, para que pueda ejercer su derecho de defensa o incluso poner en conocimiento de las autoridades de tránsito la identificación de la persona que pudo haber incurrido en la conducta que se castiga por la Ley 769 de 2002.

En este sentido, sobre la Sentencia C-980 de 2010, en el análisis de la constitucionalidad de la notificación por medio de correo, como se recordará, precisó que:

*“La notificación por correo, entendida, de manera general, como la diligencia de envío de una copia del acto correspondiente a la dirección del afectado o interesado, cumple con el principio de publicidad, y garantiza el debido proceso, sólo a partir del recibo de la comunicación que la contiene. En virtud de esa interpretación, la sola remisión del correo no da por surtida la notificación de la decisión que se pretende comunicar, por cuanto lo que en realidad persigue el principio de publicidad, es que los actos jurídicos que exteriorizan la función pública administrativa, sean materialmente conocidos por los ciudadanos, sin restricción alguna, premisa que no se cumple con la simple introducción de una copia del acto al correo”*

De esta manera y teniendo en cuenta que se deben agotar todos los medios dispuestos por el ordenamiento jurídico vigente para notificar a quien resulte involucrado en un proceso contravencional como consecuencia de una “fotomulta”, y partiendo del hecho de que las autoridades de tránsito ejercen una función pública, reguladas de manera genérica por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se deben agotar todos los medios de notificación dispuestos en éste.

Por otro lado, frente a la expresión “quien está obligado a pagar la multa”, se resalta que este precepto fue objeto de pronunciamiento constitucional en la citada Sentencia C-980 de 2010, en la cual se determinó que para su aplicación se debe partir de una interpretación armónica y sistemática del Código de Tránsito, en cuyo Artículo 129, parágrafo 1º, se determina que “las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción”, y que de acuerdo al Artículo 135 del mismo texto, por medio de la orden de comparendo se debe citar al propietario para que brinde sus correspondientes descargos y de esta manera poder identificar al conductor que haya incurrido en

la infracción. Atendiendo a tales consideraciones, no se puede colegir que el fin pretendido por el legislador con la regulación adoptada, era menoscabar el derecho fundamental al debido proceso, pues ha de entenderse que el propietario solo pagará la multa en el evento en que se compruebe que, efectivamente, cometió la infracción. En este sentido, en la mencionada providencia se manifestó frente a tal expresión, lo siguiente:

*“(...)la regla según la cual “En tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la multa”, no establece una forma de responsabilidad objetiva ni viola el derecho al debido proceso, pues una interpretación sistemática y armónica de la misma, permite advertir que el propietario del vehículo está en capacidad de comparecer al proceso administrativo para ejercer la defensa de sus intereses, de manera que la obligación de pagar la multa solo se produce cuando se establezca su culpabilidad, es decir, cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción, o cuando éste lo admita expresa o implícitamente.”*

En este sentido, es pertinente aclarar que la notificación se realizará al propietario del vehículo, cuando no sea posible individualizar al infractor, ya que, como se dijo anteriormente, únicamente es posible imponer la sanción a quien hubiere incurrido en ella. Frente a este aparte, en la Sentencia C-530 de 2003, se manifestó lo siguiente:

*“Del texto del Artículo 129 de la ley acusada no se sigue directamente la responsabilidad del propietario, pues éste será notificado de la infracción de tránsito sólo si no es posible identificar o notificar al conductor. La notificación tiene como fin asegurar su derecho a la defensa en el proceso, pues así tendrá la oportunidad de rendir sus descargos. Así, la notificación prevista en este Artículo no viola el derecho al debido proceso de conductores o propietarios. Por el contrario, esa regulación busca que el propietario del vehículo se defienda en el proceso y pueda tomar las medidas pertinentes para aclarar la situación. Además, el párrafo 1º del Artículo 129 establece que las multas no serán impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción. Esta regla general debe ser la guía en el entendimiento del aparte acusado, pues el legislador previó distintas formas de hacer comparecer al conductor y de avisar al propietario del vehículo sobre la infracción, para que pueda desvirtuar los hechos. Lo anterior proscribiera cualquier forma de responsabilidad objetiva que pudiera predicarse del propietario como pasará a demostrarse.”*

Ahora, una vez se logre surtir la orden de comparendo, de acuerdo al Artículo 136 del Código de Tránsito, existen tres opciones, (i) el presunto infractor puede aceptar la contravención y proceder a su correspondiente pago; (ii) manifestar, dentro de los 11 días<sup>4</sup> hábiles siguientes a la notificación, su inconformidad

---

<sup>4</sup>Ley 769 de 2002, Artículo 136: “Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados (...).

Artículo 137, inciso 2, “La actuación se adelantará en la forma prevista en el Artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual

frente a la infracción impuesta, evento en el cual se procederá a fijar fecha y hora de realización de la audiencia; o (iii) no asistir sin justificación dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, evento en el cual, después de transcurridos 30 días calendario de ocurrida la resunta infracción, el citado quedará vinculado al proceso, en cuyo caso se programará fecha y hora de celebración de la correspondiente audiencia.<sup>5</sup>

En la audiencia, el infractor podrá comparecer por sí mismo o mediante apoderado, quien deberá ser abogado en ejercicio y en dicha diligencia se podrán decretar y practicar pruebas, así como sancionar o absolver al inculcado. La decisión que se adopte, se debe notificar en estrados.

Según el Artículo 137, inciso 3°, si el citado no presenta descargos, ni tampoco solicita pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se debe proceder a registrar la sanción a su cargo en el Registro de Conductores Infractores.

En cuanto a los recursos procedentes, el recurso de reposición procede contra los autos emitidos en audiencia y debe interponerse y sustentarse en la misma audiencia que se emitan. El recurso de apelación procede únicamente contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia, debe interponerse de manera oral y en la misma audiencia que se profiera (Artículo 142, Ley 769 de 2002).

---

deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo.” (Subraya fuera del texto).

<sup>5</sup> De acuerdo al Artículo 136 de la Ley 769 de 2002, para el pago en caso de aceptar la infracción, sin necesidad de otra actuación administrativa, se debe obedecer a las siguientes reglas:

“1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito o en un Centro Integral de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a éste se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o 2. Cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un Centro Integral de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a éste se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o 3. Si aceptada la infracción, ésta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculcado deberá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.

Si el inculcado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles.

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados (...).

Artículo 137, inciso 2, “La actuación se adelantará en la forma prevista en el Artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo.” (Subraya fuera del texto).

En este orden de ideas, es importante realizar las siguientes precisiones, con base en lo sentado en el Código Nacional de Tránsito y la Jurisprudencia relacionada anteriormente:

1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Artículo 129).
2. Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Artículo 135, Inciso 5).
3. La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Artículo 135, inciso 5 y Sentencia C-980 de 2010).
4. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Artículo 135, inciso 5 y Ley 1437 de 2011, Artículo 72).
5. Una vez recibida la notificación hay tres opciones:
  - a. Realizar el pago (Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3).
  - b. Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe realizar audiencia pública (Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137).
  - c. No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).
6. En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Artículo 138).
7. En audiencia se realizarán descargos y se decretaran las pruebas solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Artículo 136, inciso 4).
8. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Artículo 142).

La naturaleza jurídica de la resolución mencionada corresponde a la de un acto administrativo particular por medio del cual se crea una situación jurídica. Por ende, cuando el perjudicado no esté conforme con la sanción impuesta, el mecanismo judicial procedente será el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual permite resarcir el daño causado injustificadamente a un derecho subjetivo”.

Debe tenerse en cuenta que, uno de los requisitos para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es haber interpuesto los recursos en sede administrativa, sin embargo, cuando no se hubiesen presentado porque las autoridades no lo permitieron, no es posible exigir ese requisito. La falta de notificación de los actos administrativos, implica que los afectados no tengan conocimiento de los pronunciamientos de la administración y, por ende, constituye una barrera para el ejercicio los recursos procedentes, en consecuencia, cuando la alta de interposición de recursos obedezca a la falta de notificación, es posible acceder al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando no se hubiere agotado ese requisito de procedencia.

Por otro lado, también resultaría posible solicitar la revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual se impone la sanción, regulada en el Artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.”.

#### **CASO EN CONCRETO:**

Se fundamentan las pretensiones del actor en este asunto en que se revoque el proceso convencional por indebida notificación, rehaciendo el trámite de las fotos detenciones que se relaciona:

<b>COMPARENDO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>ENVIO</b>	<b>GUIA</b>	<b>DIAS REMISION</b>
D0500100000000 17409153	29/11/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	01/12/2017	44546500342	3
D0500100000001 7361481	17/10/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	20/10/2017	44538201118	3
D0500100000001 5167171	21/05/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	24/05/71	33332301990 3182	3
D0500100000001 0936469	29/08/2015	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	01/09/2015	10561394769	3
D0500100000005 313861	22/06/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	24/06/2013	33332324830 0633	3
D0500100000004 065299	07/06/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	11/06/2013	3333230199 00381	3
D0500100000004 036358	25/05/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	27/03/2013	40820600188	3
D0500100000001 7390929	16/11/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	20/11/2017	44544000186	3
D0500100000001 5187662	08/06/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	12/06/2017	42699500980	3
D0500100000001 5066905	08/02/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	10/02/2017	40818400752	3
D0500100000005 523635	31/12/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	03/01/2014	10350885907	3
D0500100000004 073843	29/05/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	31/05/2013	33332301800 0268	3
D0500100000005 332774	16/06/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	18/06/201317 /06/2013	33332324650 0871	3
D0500100000001 7376312	01/11/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	03/11/2017	44541100782	3
D0500100000001 5085227	21/02/2017	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	23/02/2017	40820600186	3
D0500100000001 0936209	30/08/2015	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	01/09/2015	10561394002 203647	3
D0500100000004 070048	23/06/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellin	27/05/2013	33332324840 0049	3
D0500100000005	05/06/2013	Cl.37 64 60 Apto	Medellin	06/06/2013	33332301930	3

312991		402			0980	
D0500100000004 056820	20/05/2013	Cl.37 64 60 Apto 402	Medellín	21/05/2013	33332301580 0929	3

del vehículo de placas- MMY059 toda vez, que en la imposición de las mismas no se adelantó el debido proceso administrativo generado como consecuencia de caducidad de la sanción.

El procedimiento a fin de imponer el respectivo comparendo lo establece el Código Nacional de Tránsito en su artículo 135, modificado por la Ley 1383 de 2010 artículo 22, advirtiéndose que en este asunto la comisión de la infracción se detectó mediante un medio tecnológico – foto-detección, estableciendo la norma que en tal evento se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario.

Revisado el expediente se encuentra que:

1. Que los comparendos fueron realizados en debida forma al accionante.
2. Que fue notificado en debida forma dentro de los tres hábiles siguientes a efectuarse la infracción y en la dirección que figura registrada en el RUNT.

En conclusión, para el despacho se notificó en la dirección que el actor se registra en el RUNT más que la notificación se envió dentro de los tres -3- días hábiles a la ocurrencia de la infracción, independientemente de cuando haya sido entregada por la empresas de correos, siendo allí cuando comienza a correr el término para comparecer a ejercer su defensa y máxime si la correspondencia es devuelta por cambio de domicilio, es su obligación mantenerse atento con las situaciones que puedan suceder con su automotor, debe vigilar o verificar constantemente el sistema del SIMIT dada su condición de propietario de un vehículo automotor y así podrá acudir oportunamente al asunto presentado; y el hecho de no comparecer al escenario propio donde se debe dilucidar lo relativo a las sanciones, indudablemente lo mantendrán ajeno a situaciones como la planteada en el proceso contravencional, coartando de paso su derecho de defensa, lo que no es impedimento para continuar con el curso del proceso por parte de la Secretaría de Movilidad como efectivamente aconteció, quedándole como alternativa al usuario iniciar las acciones que proceden contra la resolución cuestionada, por lo tanto se hace imperativo mantener la decisión de primera instancia, por cuanto su petición en la presente acción de tutela es la de revocar la orden de comparendo antes relacionadas.

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de la ciudad de Medellín, administrando Justicia nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

**RESUELVE**

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la decisión recurrida.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión de acuerdo a lo normado por el canon 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE**



**GIMENA MARCELA LOPERA RESTREPO**

**Juez**

b.b

**Firmado Por:**

**GIMENA MARCELA LOPERA RESTREPO  
JUEZ CIRCUITO  
JUZGADO 017 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e682423b513a3cc365da779325550df3cfae0ddc39060d64ea188e1bb3fcb853**  
Documento generado en 30/10/2020 11:13:47 a.m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>